

**H**ace ya trece años que se inició la andadura de un cambio educativo en nuestro país. A lo largo de ese tiempo se impulsan políticas que fomentan la participación democrática de la comunidad escolar en la vida cotidiana de las escuelas e institutos, aparece la educación infantil como etapa educativa a la vez que se extiende la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años, se reforman las enseñanzas profesionales y se abren las puertas a otros enfoques didácticos en las áreas y en las materias, se crean instituciones de formación permanente del profesorado, se promueve la orientación educativa y profesional en los centros y se comienza a tener en cuenta la diversidad de aptitudes, actitudes y procedencia sociocultural de las personas que acuden de lunes a viernes a las aulas.

En esa voluntad de cambiar la educación en nuestro país el Ministerio de Educación y Ciencia y las diversas comunidades autónomas con transferencias educativas contaron inicialmente con el entusiasmo y el apoyo de un buen número de enseñantes ilusionados con los nuevos rumbos por los que al parecer iba a transitar el futuro de la educación en nuestro país. Hoy, después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo, el panorama, sin ser desalentador, sí tiende quizás hacia el desencanto.

Pese a las innegables innovaciones, pese a los diseños curriculares abiertos y flexibles, pese a la incorporación de algunos postulados de la pedagogía crítica y a la apelación (quizás a estas alturas de la historia un tanto retórica) al enseñante como investigador capaz de reflexionar sobre sus propias prácticas educativas, la sensación en el mundo de la enseñanza es hoy en unos casos de un evidente desánimo y en otros de una cierta acomodación a las rutinas y a las inercias.

Porque una cosa son los discursos sobre la educación y otra bien distinta las políticas que con frecuencia distorsionan las obvias posibilidades de mejora de la enseñanza pública que abre esta reforma educativa. Olvidada la aspiración a un cuerpo único de enseñantes, se fomenta la carrera docente y la división entre el profesorado (acceso a cátedras y a la función directiva...); casi nada se dice (y casi nada se hace) en relación con la formación inicial de los enseñantes mientras la formación continua tiene cada vez más un valor de cambio en el mercado de las acreditaciones profesionales en detrimento de su posible valor de uso pedagógico; el descenso de la población escolar no está significando una mejora sensible de las condiciones de trabajo de los enseñantes (especialmente en educación infantil y primaria) mientras la organización de los centros escolares sigue adoleciendo de una evidente inadecuación con respecto a las nuevas tareas pedagógicas que, en el uso de su autonomía curricular, deben abordar las escuelas e institutos; en épocas de ajuste económico como las actuales sigue sin aprobarse una Ley de Financiación de la LOGSE mientras el mapa escolar pone en pie de guerra a enseñantes y padres; se vuelve al viejo modelo de inspección educativa y se devalúa la elección democrática de los directores escolares...

Hoy, como escribiera Miguel Hernández, "son otras las intenciones y son otras las palabras". Todo augura un menor énfasis en la mejora de la enseñanza pública y un trasvase de fondos a los colegios privados. De ahí nuestro compromiso, hoy como ayer, con una educación pública, laica y plural, que asegure el derecho a la educación de la inmensa mayoría. Aunque éstos sean malos tiempos para la lírica.

